



Colombia: el reencauzamiento del proceso negociador

Gonzalo Salimena ¹

El proceso de negociación iniciado tiempo atrás entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del Presidente Santos sufrió un grave deterioro como consecuencia del secuestro del General Rubén Darío Alzate y de dos acompañantes más, un cabo y una abogada, por parte de la guerrilla.

Según datos aportados por la inteligencia, se sostuvo que Alzate fue detenido en la zona de Mercedes por miembros del frente 34 de las FARC, durante una inspección de obras de un proyecto energético que realiza allí el gobierno colombiano. Algunos diarios zonales pudieron acceder a documentos oficiales donde se confirmaba que el jefe militar se había aventurado sin escolta dentro del territorio donde se encuentra el referido Frente 34, motivando que sus miembros salieran de sus refugios y los tomaran como rehenes. Posteriormente y reconociendo su error al no saber con precisión los protocolos de seguridad, Alzate pidió su retiro aduciendo que se había afectado “el honor militar”.

La consecuencia inmediata del secuestro fue la suspensión unilateral de las negociaciones de paz llevadas en los últimos años por parte del gobierno de Santos, sujetando la continuación de la misma en La Habana a la liberación de los prisioneros.

Posteriormente, y con la intervención de Cuba y Noruega como garantes del proceso de negociación que se estaba llevando a cabo en La Habana, se anunció que tanto las FARC como el gobierno colombiano habían llegado a un acuerdo en cuanto a la liberación de los prisioneros sosteniendo que “las liberaciones se llevarán a cabo con la mayor brevedad posible”, sin dar mayores detalles y agradecieron la “actitud constructiva” tanto del gobierno como de la guerrilla para solucionar la suspensión de las negociaciones.

Al poco tiempo que se había secuestrado al general y sus dos acompañantes, se produjo otro hecho que pareció entorpecer el encausado proceso de paz: un ataque de la guerrilla en Gorgona, una isla del Pacífico, en la cual murió un policía y resultaron heridos otros cuatro efectivos.

Estos dos secuestros generaron una fuerte repercusión en la opinión pública colombiana y en la mayoría de los partidos políticos, quienes exigieron a la guerrilla un cese en su accionar y demostraciones concretas de voluntad de diálogo para encauzar nuevamente las negociaciones de paz que lleven a una resolución definitiva

¹ Licenciado en Relaciones Internacionales (USAL), Doctorando en Relaciones Internacionales (USAL), Postgrado en Paz y Seguridad Internacional (USAL), Técnico y Administrativo del Honorable Senado de la Nación – Dirección General de Publicaciones (HSN-DGP), Docente e Investigador en la Universidad Nacional de la Matanza (UNLAM), Docente en la Universidad del Salvador (USAL), Docente en la Universidad de Morón (UM).





del conflicto entre ambas facciones. Sin embargo pese a la opinión escéptica de algunos sectores el pasado 30 de Noviembre, las FARC liberaron a los presos. El encargado de llevar a cabo este objetivo, fue el líder guerrillero Pastor Alape, uno de los negociadores de su organización en La Habana, quién viajó al Chocó para completar el operativo encabezado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y representantes de los gobiernos de Cuba y Noruega. La liberación se produjo a orillas del río Arquía, en el departamento de Chocó, al noroeste del país; la misma zona selvática donde fue secuestrado el alto militar el 16 de noviembre.

Todo indica que la crisis está siendo superada, ya que el martes 2 de diciembre se anunció en un comunicado que se reanudaban las negociaciones que tienen como interés común y primordial “bajar el grado de intensidad al conflicto y desescalar las acciones ofensivas” como un gesto que permita arribar a un acuerdo lo más pronto posible. Además, dentro de este comunicado se hace mención al establecimiento de un mecanismo permanente, en que participarán los garantes Cuba y Noruega, para “facilitar la solución de eventuales crisis que se puedan presentar en el futuro”.

En síntesis, el comunicado parece señalar que la crisis ha quedado atrás para ambos actores, aunque es posible inferir que las próximas negociaciones no serán realizadas en los mismos términos en que se venían desarrollando hasta este momento. La agenda bilateral parece focalizarse sobre una serie de puntos: reforma agraria, participación política de los desmovilizados y narcotráfico, quedando pendiente la reparación de las víctimas, el desarme y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo de paz.

Todo nos parece indicar que las nuevas medidas adoptadas para las negociaciones por parte del gobierno de Colombia y de las FARC nos llevarán a una redefinición de identidades e intereses por parte de los actores involucrados en ese proceso, tomando en cuenta principalmente la exclusión de la violencia como medio de resolución de disputas, a la vez que una participación cada vez más activa de la sociedad civil a través de movilizaciones, como la del pasado 13 de Diciembre de 2014 remando la intención de alcanzar un proceso de paz pero sin impunidad para los guerrilleros.

